

Regreso y fracaso en tres actos: el peronismo del 73-76

Sergio Nicanoff y Fernando Pita

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se centra en los sucesos y procesos desarrollados durante el retorno del peronismo al gobierno en la etapa 1973-1976. Para poder abordar la complejidad y riqueza del período –momento histórico donde se suceden a un ritmo vertiginoso contradicciones y cambios políticos, sociales y económicos largamente gestados– partiremos de los siguientes ejes de análisis.

En primer lugar consideramos que el retorno del peronismo se enmarcó en un intento de clausurar la crisis orgánica abierta a partir del Cordobazo de 1969, de recuperar el poder legitimador del Estado recreando un sistema político capaz de controlar la conflictividad social a partir de su institucionalización y cooptación. Se propuso eliminar (por represión y aislamiento) a los nuevos actores sociales no reabsorbibles por el sistema en la medida en que éstos representaban la continuidad de prácticas autónomas de las clases subalternas. La enorme paradoja del período es que ese intento de relegitimación partió de la fuerza política que había encarnado para las mayorías populares su anhelo de cambios y que durante 18 años había sido excluida del sistema político. La contradicción entre las expectativas de transformaciones revolucionarias de importantes franjas sociales que motorizaban el regreso del peronismo al poder y los objetivos reales de quienes lideraban ese proceso (empezando por el propio Perón) estallaría con toda virulencia marcando a fuego la etapa. Dentro de la heterogénea alianza, creada para hacer posible el regreso del peronismo al gobierno, se expresaría con toda intensidad el conflicto de

clases, el enfrentamiento de proyectos antagónicos. La contradicción previa de una sociedad polarizada entre peronismo-antiperonismo dejaba lugar a una guerra entre peronistas que era la evidencia (más espectacular pero no única) de la continuidad de la crisis de dominación. Como veremos, lejos de cerrarse, la crisis orgánica se configuraría bajo nuevas formas en el trienio peronista.

En segundo lugar, veremos que el proyecto nodal del propio Perón consistía en la puesta en marcha de un modelo similar al que había impulsado a mediados de la década del 40. Su núcleo era la recreación del pacto tripartito entre el Estado, los empresarios y los sindicatos para controlar las principales variables de la economía y la renegociación de la dependencia de Argentina a partir del nuevo contexto internacional. Intentaremos demostrar que la profundidad de los cambios estructurales acaecidos desde el golpe de Estado de 1955 tornaba directamente inviable la posibilidad de la aplicación de ese modelo en la Argentina de los 70, por lo que su destino no podía ser otro que el fracaso.

En tercer lugar, veremos cómo se gestan en ese momento (particularmente durante la presidencia de Isabel Perón) nuevas lógicas que presuponen el abandono de los parámetros redistribucionistas del peronismo y el primer intento de adaptar el movimiento peronista a las políticas de ajuste reclamadas por los grandes grupos económicos. En ese sentido, las políticas neoliberales que implementaría la dictadura militar de 1976 tienen un verdadero antecedente en el denominado Rodrigazo.¹

Finalmente nos detendremos en la diversidad de caminos que recorrerán las distintas prácticas de ese torrente social impugnador nacido a fines de los 60. Aunque nunca homogéneo, como ya hemos analizado, el combate común contra la dictadura y el desarrollo de nuevos métodos de lucha fue creando, a grandes trazos, en sus diversos actores, una subjetividad convergente. Al llegar el peronismo al gobierno se configuró un nuevo escenario donde la discusión pasó a estar centrada en el grado de apoyo o no que se le daba al nuevo gobierno, en la caracterización del plan económico y en qué medida

1 En 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón, aplicó un programa de ajuste brutal intentando readecuar el capitalismo argentino a los nuevos planteos de los sectores más concentrados del capital.

éste representaba una etapa de cambios reales o una reestructuración del sistema donde la variable de ajuste continuaban siendo los trabajadores. Las diferentes respuestas a esas preguntas acentuaron, en el trienio peronista, la separación y las divergencias dentro de ese campo potencialmente revolucionario constituido durante la dictadura.

Para el desarrollo de estos ejes analíticos subdividiremos el periodo en tres etapas, no por una distinción meramente cronológica sino porque entendemos que cada una de ellas tiene elementos que la diferencian de las otras.² La primera comienza con la asunción de Héctor J. Cámpora al gobierno y finaliza con su renuncia (del 25 de mayo de 1973 al 13 de julio de 1973). Esos breves días de gestión se enmarcan en una sociedad altamente movilizada que espera modificaciones de fondo y se clausura con el inicio de la depuración política dentro del peronismo.

El segundo momento abarca desde la llegada de Raúl Lastiri a la presidencia, pasando por el regreso de Perón al gobierno hasta su muerte (del 13 de julio de 1973 al 1 de julio de 1974). Implica el pleno despliegue del proyecto del líder, así como la demostración empírica de sus límites e inviabilidad estructural. En ese momento, se agudizan irreversiblemente tanto las contradicciones dentro del peronismo como la dicotomía entre el intento de relegitimación del Estado y del sistema político, por un lado, y la continuidad de la conflictividad social, por el otro.

El tercer periodo va desde la asunción de Isabel Perón a la presidencia hasta el golpe de Estado que la derroca (del 1 de Julio de 1974 al 24 de marzo de 1976). Esta etapa estará marcada por el derrumbe total del proyecto original de Perón, por el intento de reformularlo en función de las necesidades estratégicas del gran capital y por la intensificación de la crisis de dominación abierta en 1969.

² Tomamos aquí la caracterización elaborada por Maristella Svampa: *El populismo imposible y sus actores, 1973-1976*, en Daniel James (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

PRIMERA PARTE: EL BREVE SUEÑO DE LA “PRIMAVERA” CAMPORISTA

1. Nada es igual, todo cambió

El triunfo electoral del 11 de marzo posibilitó el regreso del peronismo al gobierno pero dejó en pie una anomalía heredada de la dictadura. Perón, al no poder ser candidato y delegar ese rol en Héctor J. Cámpora, se encontraba en la situación de que aunque era el líder político del proceso estaba alejado de la Casa de Gobierno. El nuevo presidente distaba de ser el conductor real del movimiento peronista y el suyo era un poder vicario que dependía totalmente del apoyo de Perón para legitimar su ejercicio del gobierno. Esa tensión no tardó en resolverse en detrimento del otrora odontólogo a través de su caída. Pevio al desarrollo de ese final, el General desplegó todos sus esfuerzos para impulsar un proyecto político-económico que contaba con tres elementos fundamentales: 1) reinstalar como principal sostén de la economía un pacto social tripartito entre el capital, los sindicatos y el Estado desde donde mantener en caja, mediante la concertación, los precios y los salarios. El liderazgo de ese proceso lo tendría la fracción de la burguesía denominada nacional, a través de la Confederación General Económica, cuyo dirigente máximo era José Gelbard.³ 2) Consolidar un sistema político relegitimado, para lo cual, a diferencia de su experiencia anterior, se proponía rehabilitar a los partidos políticos y al Parlamento como escenario de negociación y acuerdo. En ese esquema, ocupaba un lugar central el radicalismo, que como

4

3 José Gelbard, elegido directamente por Perón como ministro de Economía en la presidencia de Cámpora, representaba a los medianos y pequeños propietarios de la industria, el campo y la ciudad nucleados en la CGE. Auténtico arquitecto de ese agrupamiento empresarial desde el primer gobierno peronista, había mantenido su liderazgo y la pervivencia de la Confederación tras el golpe de Estado de 1955. El “ruso”, como lo designaban sus íntimos, era el dueño de un importante grupo económico que le permitió acumular una considerable fortuna. Su crecimiento personal iba de la mano de su conocimiento de los pasillos del poder y una multifacética personalidad política. Vinculado desde su juventud al Partido Comunista Argentino, Gelbard jamás rompió los vínculos que lo unían con esa estructura, a la vez que logró ser hombre de confianza de Perón y tejer estrechos lazos con Lanusse, beneficiándose durante su presidencia con jugosos contratos otorgados por el Estado a las empresas que controlaba. Para una interesante biografía del personaje, véase María Seoane: *El burgués maldito*, Buenos Aires, Planeta, 1998.

principal partido de la oposición debía tener una participación activa en las principales decisiones de gobierno. Para ello, era necesario abrir canales de diálogo y consulta permanentes. 3) Finalmente, y no por ello menos importante, Perón procuraba verticalizar el movimiento peronista desde su conducción, disciplinando (y si eso no sucedía, eliminando) a todas las corrientes internas. Buscaba con ello la institucionalización definitiva, no sólo del peronismo, sino centralmente de la conflictividad social heredada de la dictadura.

Todos esos objetivos tenían que ser implementados por Perón concentrando en su persona la capacidad de arbitraje entre los diversos grupos de poder y facciones mientras se encontraba fuera de la presidencia, en el marco de una sociedad fuertemente movilizadora y profundamente distinta a la de la década del 40.

Perón no desconocía esos cambios, pero probablemente subestimaba su magnitud. La dirigencia sindical, tras el golpe de 1955, distaba de ser una fuerza fácilmente manejable desde el Estado. Por el contrario, sus líderes estaban acostumbrados a manejarse con independencia de los deseos de Perón durante su largo exilio y deseaban mantener su status de interlocutores con los restantes factores de poder en el país. Las nuevas corrientes sindicales antiburocráticas que les planteaban un desafío inédito a su conducción los obligaba, más que nunca, a conseguir conquistas concretas para mostrarlas a sus inquietas bases sociales. La contradicción era que para ello debían renegociar su lugar en el movimiento y su cercanía con el Estado, encontrando apoyo para combatir a sus enemigos; para ello tenían que pagar un precio: renunciar a su juego autónomo con el poder subordinándose a las directivas establecidas por Perón. A su vez, el pacto social diseñado por éste distaba, como veremos, de llenar las expectativas de mejora en el nivel de vida que albergaban muchos trabajadores, con lo que la contradicción permanecería latente, nunca resuelta, para finalmente estallar tras la muerte del líder.

Si en los años 40 Perón contaba inicialmente con el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, muy distinta era la situación que se planteaba en la década de los 70. Ambas instituciones estaban pobladas en sus jerarquías de cuadros profundamente antiperonistas que, ante la nueva coyuntura, optaban por una estrategia de repliegue y reacomodamiento interno a la espera de los fu-

turos tropiezos del nuevo gobierno. En particular para los militares, la preocupación principal pasaba por recuperarse de su fuerte desprestigio social, así como prepararse para los futuros enfrentamientos con lo que avizoraban como el núcleo duro del conflicto social: las organizaciones armadas y el sindicalismo clasista.

Con la llegada de Cámpora, los cambios en las cúpulas militares distaron de ser espectaculares. El nombramiento del general Jorge Carcagno en la jefatura del Ejército instaló en la cúpula de las Fuerzas Armadas a un grupo de oficiales dispuestos a romper con la Doctrina de Seguridad Nacional e imbuidos de un espíritu antinorteamericano.⁴ Aun así no expresaban una corriente interna con peso determinante dentro de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, entre la nueva cúpula y el grueso de la oficialidad, existía un divorcio de concepciones que sólo se pudo sostener, por corto tiempo, dada la particular situación social en que asumió el gobierno de Cámpora.

Las bases materiales (divisas de posguerra) y políticas (situación internacional que permitía algún espacio de tibia autonomía para Argentina) que habían posibilitado el ascenso de Perón a mediados de la década de 1940 sencillamente no existían en los años 70. Pero, sobre todo, era radicalmente distinto el peso social alcanzado (dentro y fuera del peronismo) por aquellos sectores que postulaban modificaciones estructurales de la sociedad. Después de un largo proceso de luchas, con un fuerte prestigio social en el marco de una sociedad altamente politizada, las nuevas organizaciones desarrolladas post-Cordobazo no estaban dispuestas fácilmente a renunciar a sus objetivos de cambios en aras de la gobernabilidad de un sistema al que repudiaban. Allí se encontraba uno de los nudos centrales de la etapa. Perón avaló a los sectores revolucionarios del movimiento en su enfrentamiento con la dictadura contribuyendo a su legitimación e impulsando redefiniciones ideológicas. Un ejemplo de esto era la

6

4 Carcagno pronunció un célebre discurso en la Conferencia de Ejércitos Americanos de Caracas, donde cuestionó las políticas norteamericanas para América Latina. Carcagno abogó por el retiro de las misiones militares estadounidenses y francesas instaladas en Argentina y autorizó la realización del Operativo Dorrego, un plan de reconstrucción de zonas inundadas, llevado adelante en 1973 a través de una acción conjunta entre la Juventud Peronista y las Fuerzas Armadas. En diciembre de 1973, Perón lo desplazó del cargo porque temía que la figura de Carcagno alcanzara dimensiones de liderazgo paralelo en una probable alianza con Montoneros.

idea de un socialismo nacional⁵ que suponía el acercamiento del peronismo al campo socialista mundial.

Alentando, como vimos, a la guerrilla tras el rótulo de formaciones especiales y jugando con la idea de un “trasvasamiento generacional” dentro del peronismo que llevaría a los jóvenes a los puestos de dirección, el viejo general ayudó, en esa coyuntura de enfrentamiento contra la dictadura, a que se consolidara la izquierda peronista, particularmente la liderada por Montoneros. Pero, para Perón, esas definiciones tenían un sentido meramente táctico. Las usaba para amenazar con una salida revolucionaria al poder instituido. Lo que realmente buscaba era conseguir un espacio de negociación que le permitiera retornar al gobierno y desplegar su verdadero proyecto: una suerte de capitalismo redistribucionista que renegociara la inserción de Argentina en el sistema capitalista mundial.

El gran equívoco del período es que para los miembros de la Tendencia Revolucionaria del peronismo esas redefiniciones no tenían un sentido táctico sino estratégico. Tras 18 años de proscripción, con una clase obrera mayoritariamente peronista y con altos niveles de combatividad, dueños de la mayor capacidad de movilización del país a través de las multitudinarias columnas de la Juventud Peronista, con simpatías sociales importantes en la población hacia las organizaciones armadas, en un contexto de alta conflictividad social, con un líder exiliado que apoyaba sus acciones y hablaba de socialismo, los jóvenes de la Tendencia creyeron que el retorno de Perón al gobierno abría una etapa de modificaciones estructurales. Perón era para ellos un líder que conduciría a la sociedad argentina hacia una revolución socialista. Tras el triunfo electoral reclamaban un lugar de dirección

7

⁵ La formulación de la idea de socialismo nacional en el propio Perón siempre fue ambigua e imprecisa, factible de ser reinterpretada de formas antagónicas. Para los sectores revolucionarios del movimiento se trataba de redireccionar las definiciones ideológicas del peronismo hacia una definición por el socialismo en un sentido marxista. Implicaba romper, en un proceso que se desarrollaría por etapas, con las estructuras capitalistas predominantes en el país. Por el contrario, para los pequeños grupos de ultraderecha del peronismo, el socialismo nacional se asociaba directamente con la experiencia del nazismo o del fascismo italiano. Partían de definir como enemigo principal a la Sinarquía (un supuesto organismo supranacional que reunía a capitalistas, comunistas y judíos con el fin de dominar el mundo) que encarnaban en el país todos los sectores revolucionarios. La solución que proponían era la eliminación física de todos los oponentes.

en el movimiento que juzgaban suficientemente ganado por los enormes sacrificios de vidas y esfuerzos realizados en la resistencia a la dictadura. Si por una cuestión biológica la vida de Perón llegaba a su término, la Juventud Peronista se veía a sí misma como su futura heredera bendecida en ese rol por el propio General. La desilusión no tardaría en llegar, pero en ese tránsito se resolvería la contradicción principal que signó al breve interregno camporista: el conflicto entre los que pugnaban por la restauración del sistema y los que se lanzaban a su ruptura. El primer escenario de esa batalla se dio en el interior del peronismo, dirimiéndose quiénes serían los ganadores reales del proceso. Los jóvenes de la Tendencia, para su sorpresa, descubrirían que Perón se encontraba en esa disputa en el polo opuesto al de sus aspiraciones revolucionarias.

2. La continuidad de la crisis de dominación

El gabinete designado por Cámpora reflejaba un reparto de poder dentro de los distintos segmentos del movimiento. Se prolongaba así la indefinición respecto de qué sectores tendrían la hegemonía del proceso político y, por lo tanto, no se conformaba plenamente a nadie; mucho menos a la izquierda peronista que tuvo el papel central en la campaña electoral.

El ministerio del Interior (Esteban Righi) y el de Relaciones Exteriores (Juan Carlos Puig) quedaron en manos de hombres de confianza del propio Cámpora. Aunque en la época se empezó a hablar de camporismo, es necesario aclarar que el mismo nunca se estructuró como corriente interna organizada. En realidad, se trataba de políticos progresistas –dentro del peronismo– vinculados personalmente al entonces presidente que, en muchos temas, podían converger con Montoneros pero no estaban encuadrados dentro de esa organización. Aunque casi excluidos del gabinete, los Montoneros alcanzaron un importante poder institucional, reflejado, sobre todo, en la cercanía política con varios gobernadores, algunos de ellos de distritos clave: Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Obregón Cano en Córdoba, Martínez Baca en Mendoza, Miguel Ragone en Salta, Jorge Cepernic en Santa Cruz, así como en el control de la

Universidad de Buenos Aires con el nombramiento como rector de Rodolfo Puiggrós.

Las designaciones marcaban el peso que se otorgaba a las corporaciones en áreas clave del gobierno, dados los nombramientos del conductor de la CGE, José Gelbard, en Economía y el de un connotado miembro de la burocracia sindical, Ricardo Otero –hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)–, en el Ministerio de Trabajo. Un alerta mayor para los sectores revolucionarios era la nominación del secretario privado de Perón, José López Rega, como ministro de Bienestar Social. El personaje, conocido como el “brujo” (por su pública vinculación con la astrología y el esoterismo), se había relacionado con la tercera esposa del líder, María Estela Martínez de Perón, en 1965, en el marco del conflicto entre Perón y Augusto Vandor. Desde ese momento, López Rega alcanzaría un enorme ascendiente en el entorno del ex presidente hasta tornarse insustituible. De sólidas relaciones con grupos de extrema derecha de todo el mundo, ligado a la logia secreta Propaganda Dos del empresario italiano Licio Gelli (un organismo con epicentro en Italia, que anudaba contactos con el Vaticano, empresarios, grupos fascistas, la mafia, políticos y jefes militares), el poder de López Rega y su aliada Isabel dependía, al no tener sólidas bases de sustento dentro del movimiento, casi exclusivamente del apoyo y la legitimidad que le otorgaba el propio Perón. Su estrategia residía en hacerse con el control absoluto del peronismo y del gobierno. Conscientes de que la vida de Perón se acababa (aparentemente los informes médicos elaborados en febrero de 1973 adelantaban que al General le quedaba escaso tiempo de vida), ambos veían que si Cámpora quedaba en el gobierno, no tendrían ninguna posibilidad de ejercer su influencia.⁶ Aterrados ante ese escenario, se lanzaron rápidamente a conspirar para lograr su caída, llevar a Perón al gobierno y luego colocarse como sus sucesores y preparar el exterminio de todos los sectores revolucionarios dentro (en primera instancia) y fuera del peronismo. Las acciones de este núcleo fascista dentro del peronismo no pueden entenderse desde la mera óptica de las luchas por el poder. Su proyecto expresaba intereses, tanto internacionales

9

6 Para esta hipótesis y una detallada biografía de Cámpora, véase Miguel Bonasso: *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta, 1997.

como locales, dispuestos a una escalada contrarrevolucionaria para cauterizar la herida abierta por la crisis de dominación.

El punto central del proceso político residía, mucho más que en las conspiraciones de palacio, en una sociedad civil altamente movilizada y con fuertes expectativas de cambio. El temor de los factores de poder frente al gobierno de Cámpora no estribaba en un programa económico-social que se destacaba por su moderación, sino en el clima político de luchas sociales que le daban su contexto.

El día de asunción del nuevo gobierno, el 25 de mayo, casi un millón de personas desbordaban las calles de Buenos Aires. Con su presencia impidieron que el representante del gobierno estadounidense asistiera a la ceremonia de traspaso de mando, obligaron a que los miembros de la Junta Militar abandonaran la Casa Rosada en helicóptero y superaron todo el operativo de seguridad diseñado por la saliente dictadura. En la jura de Cámpora, la ovacionada presencia de los presidentes de Cuba (Osvaldo Dorticós) y de Chile (Salvador Allende) terminó de otorgarle a la jornada un espíritu de ruptura con lo anterior y de imposición de un nuevo orden.

Por la noche, decenas de miles de manifestantes se desplazaron hacia la cárcel de Devoto. Alineados tras la consigna de “ni un solo día de gobierno popular con presos políticos”, exigieron la inmediata libertad de los miembros de las organizaciones armadas detenidos en el penal. Tras horas de tensión y febriles negociaciones, los presos fueron liberados. Se había llevado adelante lo que se conocería como el “Devotazo”. El hecho, horas después legalizado por el Parlamento con una ley de amnistía, marcó la tónica del momento. Socialmente, otorgaba legitimidad a todas las formas de resistencia, incluida la armada, desarrolladas durante la dictadura militar. De manera mucho más decisiva para el futuro inmediato, constituía un primer tropiezo para la idea de institucionalización de los conflictos, pergeñada por Perón, puesto que los poderes legales (Ejecutivo, Parlamento) sancionaron post facto –con la ley de amnistía– una situación que la movilización popular había arrancado por sí misma.

Para las Fuerzas Armadas significó el derrumbe de uno de los puntos fundamentales del Gran Acuerdo Nacional (GAN): la continuidad del encarcelamiento y represión de los combatientes guerrilleros. Aún no se habían apagado los ecos del Devotazo, cuando un nue-

vo fenómeno emergente de la ebullición social convocaba la atención. Una ola de ocupaciones de distintos establecimientos sacudía todo el país. Las tomas⁷ de hospitales, escuelas, diarios, canales, radios, fábricas, municipios, entre otros organismos, se multiplicaron con velocidad pasmosa en las primeras semanas de junio hasta acercarse al millar. La vertiginosidad del proceso –de crecimiento aritmético a partir del 4 de junio– y su metodología, basada en la acción directa, conmovían a todos los factores de poder que inmediatamente recurrieron a los clásicos fantasmas del caos y la anarquía.

Pretender explicar ese proceso como el producto exclusivo de un enfrentamiento dentro del peronismo entre Montoneros y los grupos de ultraderecha resultaría insuficiente. Sin duda, los sectores revolucionarios del peronismo tuvieron una participación activa en buena parte de las tomas y, a su vez, la derecha peronista actuó realizando sus propias ocupaciones –particularmente de medios de comunicación– con el fin de controlar áreas clave en el nuevo gobierno. Aun así, el sentido más profundo de las tomas excedía el enfrentamiento dentro del peronismo. De manera mucho más determinante, expresaban la necesidad de amplias franjas sociales de impedir que al frente de diversos organismos continuaran funcionarios puestos por la dictadura. Las ocupaciones, lejos de atacar el nuevo gobierno, pretendían impedir el continuismo de la herencia del gobierno anterior.

11

Partiendo de asambleas masivas que involucraban a los diversos actores de cada área y de la percepción de quienes las motorizaban de que era necesario tomar su destino en sus propias manos, las tomas planteaban, de hecho, un escenario donde el sujeto de las transformaciones no era, centralmente, el gobierno ni las instituciones, sino la sociedad civil organizada y movilizada. Esa dinámica se inscribía en el marco de la disputa más general, ya explicitada, sobre el carácter y los contenidos del nuevo gobierno. El dilema era: transformaciones de fondo apoyadas en las luchas sociales o reinstitucionalización de la mano del acuerdo entre los partidos mayoritarios, la burocracia sindical y la fracción de la burguesía industrial de la CGE, alrededor

⁷ Tomamos para el análisis de este fenómeno el trabajo de Fabián Nievas: “Cámpora: Primavera-Otoño, las tomas”, en Alfredo Pucciarelli (comp.), *La primacía de la política: Lanusse, Perón y la nueva izquierda en los tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

del pacto social. Para la derecha peronista, Cámpora debía ser desplazado porque su llegada al gobierno era un fruto –incluso más allá de su propia voluntad– de lo primero más que de lo segundo. No podía –ni probablemente quería– llevar adelante el proyecto de depuración y control que, partiendo del propio Perón, se le exigía.

El 14 de junio el secretario general del Partido Justicialista, Juan Manuel Abal Medina, reclamó el cese de las tomas. Poco después, se le plegó la propia Juventud Peronista. En tal contexto, el proceso de tomas iniciaba su reflujo. Aun así, la decisión de terminar con el gobierno de Cámpora para, a su vez, acabar con la crisis de dominación ya estaba tomada. La “primavera”, el sueño del florecimiento de un nuevo orden, debía llegar a su fin.

3. Ezeiza: masacre y golpe

El 20 de junio de 1973 era el día fijado para el regreso definitivo de Perón al país. El escenario elegido para el acontecimiento era el puente El Trébol, ubicado a tres kilómetros del aeropuerto internacional de Ezeiza. Una enorme movilización popular nunca antes vista –los cálculos más conservadores hablan de más de dos millones de personas– acudiría a la cita largamente postergada en lo que se esperaba que fuera una fiesta de dimensiones gigantescas. Nada de eso ocurriría.

12

La fiesta se trocaría en masacre iniciando un punto de inflexión en la aplicación del terror hacia las clases subalternas que, a partir de allí, crecería en una espiral indetenible. Para la ultraderecha peronista, había llegado la hora del escarmiento. El gigantesco acto donde el viejo general dirigiría la palabra a su pueblo debía ser transformado en una masacre premeditada para culpabilizar a Montoneros, obligar inmediatamente a la renuncia de Cámpora y entronizarse en el poder.⁸ Bajo la dirección en las sombras de López Rega y la del encargo de seguridad del acto, el teniente coronel Jorge Manuel Osinde, se inició el reclutamiento de grupos de choque compuestos por mato- nes sindicales, ex miembros de las fuerzas de seguridad, delincuentes

8 Para una detallada reconstrucción de la conspiración, véase Miguel Bonasso, *op. cit.* Y, en particular, el muy documentado trabajo de Horacio Verbitsky: *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1985.

comunes y personal de los diversos servicios de inteligencia. Para el logro de sus objetivos, se desplazó de todos los aspectos organizativos del acto tanto a las fuerzas de la Tendencia como a los funcionarios del gobierno de Cámpora. El dispositivo se completó con el retiro de los efectivos de la Policía Federal de los alrededores del palco, que quedó bajo el absoluto control de los activistas de derecha, provistos de un verdadero arsenal de guerra.

En el otro polo del conflicto, no se preveía un escenario de enfrentamiento militar. Para la dirección de Montoneros, se trataba de lograr una enorme movilización encuadrada bajo sus banderas que haría que Perón, al observar esa capacidad organizativa, les otorgara un lugar de privilegio en la conducción del movimiento. Esa lectura tenía sus raíces en una visión mítica de la historia del peronismo que los jefes guerrilleros habían adoptado. Suponían que, en los actos masivos del peronismo, se producía una relación dialéctica potencialmente revolucionaria entre el líder y las masas, facilitando que los reclamos de éstas fueran siempre tomados en cuenta por Perón. Si en Ezeiza, Montoneros dirigía como vanguardia al pueblo peronista rodeando el palco, el General no tendría otra posibilidad que reconocer ese liderazgo.⁹ Desde nuestra perspectiva, esta visión demostraba un escaso conocimiento de la historia del peronismo ya que el caudillo siempre había descabezado sin piedad cualquier intento de consolidación de un liderazgo alternativo al suyo. Los jóvenes revolucionarios no esperaban el grado brutal de respuesta que encontraron.

De esta manera, los hechos se alejan de los relatos contruïdos posteriormente –anticipadores de la teoría de los dos demonios elaborada en los años 80– que presentan Ezeiza como un combate militar entre dos extremos ante un pueblo atónito que esperaba asistir a una fiesta. Cuando la columna sur de Montoneros se acercó al palco, desde éste se inició el fuego sobre los manifestantes. El saldo fue 13 muertos identificados y más de 365 heridos de bala. El avión que trajo a Perón fue desviado a la base militar de Morón. La multitud se retiró lentamente sumida en la más profunda desazón. El reencuentro no se había producido.

9 Para un relato de la existencia de esta hipótesis en las filas montoneras y una visión de su historia, véase Carlos Flaskamp: *Testimonio de la lucha armada en la Argentina*, Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002.

Aunque el objetivo final de la asonada –una suerte de ocupación de la Casa Rosada y la renuncia inmediata de Cámpora– no se concretó, por la magra convocatoria reunida ese día en Plaza de Mayo, la conspiración triunfaba en sus aspectos esenciales. Los días del presidente estaban contados. El 21 de junio Perón realizaba un discurso que legitimaba el golpe palaciego y anunciaba tiempos aciagos para la izquierda del movimiento. En sus propias palabras: “Nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes... No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina y nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen...”. Se enterraban allí los proyectos de renovación del movimiento. Rápidamente y sin escalas, la “juventud maravillosa” de otrora pasaba a la categoría de “infiltrados marxistas”. Ezeiza simbolizó ese tránsito. El momento en el que las contradicciones que el peronismo había albergado largamente en su seno, estallaban con toda su virulencia. Se evidenciaba allí que la polarización peronismo-antiperonismo dejaba lugar a una lucha donde la derecha del peronismo se aliaría sin pudores con la derecha no peronista para llevar adelante el exterminio. Se comenzaba la demonización social de Montoneros para proceder al aislamiento de todas las organizaciones populares del conjunto de las clases subalternas. Un momento en que se cristalizaba un salto cualitativo en las dosis de terror a aplicar para terminar con la movilización social.

14

Al interior del peronismo se estructuraba una alianza para expurgar a la izquierda que reunía al lopezreguismo, la burocracia sindical y la fracción del empresariado representada por Gelbard. En este último caso, no participando directamente en el armado de la represión, pero avalando políticamente cada uno de los pasos de la depuración.

La respuesta de Montoneros a tamaño eje de poder consistió en elaborar una “teoría del cerco” que imaginaba un Perón neutral en el enfrentamiento interno, rodeado y desinformado por la camarilla dirigida por López Rega.¹⁰ El eje político pergeñado era continuar

¹⁰ La tesis del cerco fue fuertemente criticada por la izquierda y por otras corrientes revolucionarias del peronismo. Alicia Eguren, vieja militante del peronismo y esposa del fallecido John William Cooke, sintetizó con sorna esa postura al afirmar: “Tengan cuidado, muchachos, que el día que salten el cerco el general los va a estar es-

con la disputa de las estructuras del movimiento, evitar su marginación e intentar una negociación directa con el líder evitando el hipotético cerco. En sus supuestos, todavía no entraba la idea de que, en las nuevas circunstancias, Perón renegaba de ellos.

No menor fue el estupor del propio Campora ante los hechos. Siempre fiel, era plenamente consciente de que su estada en la Rosada no poda prolongarse con Peron en el pas. Imaginaba que su renuncia se hara en un marco de reconocimiento a sus esfuerzos y honradez. En lugar de ello, se encontro sacado a empellones del gobierno y marginado definitivamente del poder. El 13 de julio, junto al vicepresidente Solano Lima, presento sus renunciaciones indeclinables. Quedaban las puertas abiertas para la realizacion de nuevas elecciones con la candidatura de Peron. Para completar el golpe interno, el presidente del Senado, Alejandro Daz Bialek, formalmente ubicado en la lnea de sucesion institucional, se encontro con un pasaje en sus manos para un viaje que lo alejaba del pas. Asumira el presidente de la Cmara de Diputados, Raul Lastiri, cuyo principal mrito resida en ser yerno de Jose Lpez Rega.

El 23 de septiembre de 1973, plebiscitado por una avalancha de votos del 62 por ciento del electorado, en una frmula que llevaba como vicepresidenta a su esposa Isabel, el anciano general regresaba al lugar donde siempre haba ansiado estar: la Presidencia de la Nacion.

15

SEGUNDA PARTE: EL PROYECTO DE PERON Y SU INVIABILIDAD

1. El plan Gelbard

El nuevo ministro de Economa extendera su gestion desde el 25 de mayo de 1973 hasta su renuncia, el 21 de octubre de 1974. Ocupara ese cargo con cuatro presidentes diferentes (Campora, Lastiri, Peron e Isabel), transformandose en pieza clave del proyecto de reconstitucion del Estado diseado por Peron.

perando con una metra”.

Las claves de ese programa se pueden sintetizar en cuatro aspectos fundamentales: a) el pacto social; b) una nueva legislación sobre radicación de capitales extranjeros; c) una política agraria que permitiera la transferencia de recursos del agro a la industria, al mismo tiempo que mejorar la productividad del campo; d) la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones, no sólo primarias sino de manufacturas, particularmente en los países del área socialista y del Tercer Mundo. Todo esto combinado con un mayor papel del Estado y una serie de medidas tendientes a favorecer principalmente a las empresas de capital nacional.

El nudo estratégico del proyecto residía en el pacto social. Reeditando la concepción de pacto tripartito entre asociaciones empresarias, sindicatos y gobierno, su objetivo principal era controlar institucionalmente las luchas entre el trabajo y el capital, manejando las variables principales de distribución del ingreso –salarios y precios– para mantener en caja la inflación. Al realizarse, durante el gobierno de Cámpora, el acta de acuerdo entre la CGE y la CGT, se establecía un aumento salarial del 20 por ciento, se suspendían las negociaciones colectivas por espacio de dos años y, como contrapartida, se congelaba el valor de todos los artículos fijando mecanismos de control de precios. Semejantes medidas, presentadas bajo la retórica de un paulatino mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores populares, lejos estaban de cubrir las expectativas de la clase obrera e incluso, de la propia dirigencia sindical oficialista. A cambio de un aumento que apenas retrotraía los ingresos populares al último año de gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, el movimiento obrero renunciaba a las paritarias, una herramienta central en la puja distributiva. Para el propio Perón, una vez retornado a la presidencia, el pacto era la llave maestra de su arquitectura de poder; la forma de superar la ingobernabilidad y la crisis orgánica, de recrear el sistema político, su punto de partida. Consistía en el respeto total que obreros y empresarios debían prestarle a la concertación. Consciente de que la salud del plan dependía de que los dirigentes sindicales pudieran limitar los reclamos reivindicativos de sus bases y de que el proyecto recortaba su autonomía al colocarlos bajo su disciplina vertical, Perón intentó compensarlos reforzando su poder en los sindicatos. Otorgándoles nuevamente en su discurso el carácter de “columna

vertebral del movimiento”,¹¹ premió a la burocracia con la sanción de una Ley de Asociaciones Profesionales que consolidaba su poder ante las corrientes clasistas y combativas del movimiento obrero. Por esta norma, se afirmaba el modelo centralizado de un sindicato por rama de actividad; se elevaba el mandato de las conducciones sindicales de dos a cuatro años; se facultaba a las federaciones o confederaciones a intervenir las asociaciones inferiores –lo que sencillamente implicaba que seccionales o sindicatos locales rebeldes serían aplastados por las direcciones nacionales–; se permitía a los dirigentes sindicales anular la designación de delegados hecha por las bases en sus lugares de trabajo; se le otorgaba al Ministerio de Trabajo el poder de anular elecciones y resoluciones de asamblea; se equiparaban los fueros sindicales a las inmunidades otorgadas a los parlamentarios. En esencia, un verdadero programa de disciplinamiento de los conflictos en la base y de refuerzo de la autoridad de la burocracia como pago por su acatamiento del pacto social. Pronto se descubriría que no sería suficiente para frenar los conflictos sociales.

En ese marco, el poder económico adoptaría una actitud pragmática frente al pacto. La propia UIA (Unión Industrial Argentina) se fusionaría, posteriormente, con la CGE y la mayoría de las asociaciones empresarias –con mayor o menor entusiasmo– se acogerían a los acuerdos propugnados por el gobierno. En lo que respecta a la relación con el capital extranjero, la nueva ley de inversiones obligaba a que las futuras radicaciones de empresas tuvieran un mínimo del 51 por ciento de capital nacional. Paralelamente, se buscaba favorecer las

17

11 La reconciliación pública de Perón con los dirigentes sindicales que se produjo en octubre de 1973, estuvo enmarcada por el asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci. La operación fue realizada por un comando montonero, aunque esa organización jamás asumió públicamente la autoría del hecho. Los motivos residieron en el creciente militarismo de Montoneros que respondían a la masacre de Ezeiza, que Rucci había avalado, utilizando las acciones armadas para la lucha interna del peronismo. Lanzaban un cadáver para demostrarle su poder a Perón. Rucci jugaba un papel clave para la consolidación del pacto social; era uno de los pocos dirigentes sindicales que lo apoyaban incondicionalmente, por lo que su muerte golpeaba directamente el proyecto político del líder. Para completar el cuadro, en ese mes el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentó sin éxito copar el Comando de Sanidad Militar, inaugurando así su estrategia de ataques directos al Ejército durante el gobierno peronista. Responder a la ofensiva de la derecha principalmente con acciones militares llevó rápidamente, como veremos, al aislamiento y la pérdida de legitimidad de todas las organizaciones guerrilleras.

exportaciones de manufacturas ofreciendo mayores ventajas a aquellas empresas que realizaran exportaciones con mayor valor agregado. En este punto, los cambios eran mucho más moderados de lo que la retórica nacionalista con la que se los presentaba hacía suponer. Las empresas transnacionales que, como vimos, habían alcanzado un papel preponderante en la estructura económica mantenían las ventajas previamente adquiridas. Su poder de financiamiento, mayor tecnología, superior productividad y tamaño, les permitían continuar ejerciendo su predominio en el mercado interno. Incluso la ofensiva de Gelbard para aumentar las exportaciones a los países socialistas los seguía ubicando como un actor privilegiado.¹² En todo caso, el equipo económico mostraba una especial preocupación por atraer inversiones europeas antes que de Estados Unidos. Más que una búsqueda de mayor autonomía, se asimilaba a un intento de diversificar la dependencia, contrabalanceando el peso de las empresas norteamericanas con la llegada de capital europeo.

Un aspecto especialmente conflictivo se perfilaba con el agro. El plan propiciaba la nacionalización parcial del comercio exterior previendo la creación de dos monopolios exportadores de carnes y granos. Al mismo tiempo se proponía avanzar en el disciplinamiento de la burguesía terrateniente. Para ello, se propugnaba la instalación de un impuesto a la renta potencial de la tierra¹³ y, a través de un anteproyecto de Ley Agraria, se amenazaba con la posibilidad de expropiar unidades agrarias improductivas. En esencia, nuevamente el Estado buscaba apropiarse de los beneficios de las exportaciones primarias controlando los canales de comercialización para volcar capitales hacia el sector industrial, al mismo tiempo que, compulsivamente, a través de penalizaciones tributarias inducía a la burguesía agraria a su modernización productiva. El bloque terrateniente demostraría una vez más su capacidad de bloquear cualquier intento reformista ya que, finalmente, el proyecto de ley jamás se concretaría. El peronismo

18

12 Un ejemplo de esto lo constituye la exportación de autos y camiones a Cuba acordada en el período. El bloqueo comercial norteamericano que sufría la isla se rompió con la venta de autos elaborados por las filiales de empresas transnacionales radicadas en Argentina.

13 Sencillamente establecía que aquellas tierras explotadas deficientemente, por debajo de lo que podían rendir, pagarían un impuesto especial.

repetía la misma conducta que en la década de 1940: presionar sobre los niveles de ganancia del agro sin avanzar seriamente en una política que modificara de raíz la concentración de la propiedad de la tierra. Al no hacerlo, dejaba en manos de la burguesía agraria dos variables centrales: la situación de la balanza de pagos –por medio de las exportaciones agropecuarias– y el nivel de los salarios reales (a través del impacto de la oferta de alimentos sobre los precios de los mismos).¹⁴ Dejar intacto ese poder volvería a pagarse muy caro.

En resumen, el plan Gelbard recreaba el modelo capitalista dependiente de sustitución de importaciones, pretendía congelar la lucha de clases a través del pacto social, buscaba un mejor lugar bajo el sol para la denominada burguesía nacional, para lo que intentaba renegociar condiciones con el resto de las fracciones del bloque dominante, pretendía diversificar las exportaciones con más manufacturas a nuevos mercados y reorganizar el aparato estatal, recuperando para éste mayor capacidad de intervención y arbitraje.¹⁵ En los primeros meses de aplicación del plan, el éxito parecía sonreírle. Una coyuntura de altos precios de las exportaciones agropecuarias en el mercado mundial permitió un aumento sustancial de las reservas monetarias del país, al mismo tiempo que la inflación se desaceleraba notablemente y crecía el producto bruto interno. Muy pronto quedaría en evidencia que esos éxitos tenían los pies de barro.

19

2. El fracaso de Perón

¿Era posible la consolidación de ese modelo bajo las condiciones nacionales e internacionales existentes en la década de 1970? Nuestra respuesta es, decididamente, que no. En primer lugar, como elemento determinante, el conflicto de clases había llegado a un grado de agudeza tal que se tornaba imposible su absorción por medio de la institucionalización. La disconformidad con los aumentos salariales

¹⁴ Véase Liliana De Riz: *Retorno y derrumbe*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1987.

¹⁵ Otras posturas juzgan que la política económica beneficiaba directamente a las fracciones más poderosas de la burguesía industrial, sin ningún intento de renegociación de la dependencia de por medio, garantizando su hegemonía al interior del bloque dominante. Para su análisis, véase Mónica Peralta Ramos: *Acumulación del capital y crisis política en Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.

otorgados por el pacto social, al no poder expresarse directamente por la vigencia del acuerdo, trasladó los reclamos hacia la renegociación de las condiciones de trabajo en las empresas, así como a la lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos (tanto los cesanteados por los anteriores gobiernos militares como los generados durante ese gobierno peronista). El estado de rebelión de la base obrera en las fábricas, nacido durante la dictadura en el interior del país, llegaba finalmente al conurbano bonaerense con su impronta de democracia de base y acción directa. Ese resurgir del protagonismo de los trabajadores conducía, irreversiblemente, al choque con la burocracia sindical dado su compromiso estructural con las patronales. De esa manera los conflictos se trasladaban al reconocimiento –por parte de las empresas y el Estado– de los representantes elegidos directamente por las bases, a espaldas de los representantes sindicales oficiales.¹⁶

Al llegar Perón a la presidencia, se lanzó una verdadera ofensiva sobre esta movilización obrera. Ese ataque no se limitó a la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, que ya analizamos, sino que incluyó la reforma del Código Penal endureciendo sus normas; se restableció un decreto ley del gobierno de Juan Carlos Onganía que reglamentaba el arbitraje obligatorio de todos los conflictos laborales dándole al Estado la facultad de declarar ilegal cualquier huelga; se sancionó la Ley de Prescindibilidad por la que cualquier organismo del Estado podía dar de baja a su personal sin causa justificada, pagando sólo un mes de indemnización. Como es evidente, no se trataba tan sólo del enfrentamiento con las organizaciones guerrilleras sino de acometer contra toda manifestación de lucha que no encajara en el corset del pacto social. Como la base estructural del conflicto tenía sus raíces en las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo por el capital que el proyecto económico no modificaba, la continuidad de la movilización obrera persistía. De manera mucho más ominosa, la ofensiva disciplinadora excedería, como veremos, los marcos legales para transformarse en terrorismo paraestatal. El espacio para la conciliación de clases se había reducido fuertemente en Argentina.

20

¹⁶ Véase un revelador cuadro de los motivos de los conflictos sindicales en la etapa 1973-1976 en Juan Carlos Torre: *Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1989, p. 64.

En segundo lugar, la estructura económica capitalista dependiente, configurada en los años 70, dejaba escaso lugar para cualquier intento de renegociación dentro de la burguesía, encabezado por las fracciones mercado internistas del empresariado nacional. Como se analiza en el artículo anterior,¹⁷ desde los 50, el predominio del capital extranjero generó un comportamiento de asociación subordinada por parte de la burguesía industrial local adaptándose a las nuevas condiciones del mercado. Por más que el discurso oficial del retornado peronismo hablara de “La Argentina Potencia”, aludiendo metafóricamente a una suerte de capitalismo independiente, el plan Gelbard consistía mucho más en intentar mejorar los vínculos de asociación con las transnacionales que en procurar la ruptura de esos lazos. Reflejaba los límites estructurales de esa burguesía local ya definitivamente atada a las condiciones fijadas por la reproducción del capitalismo a escala global. De manera más decisiva, el eje de acumulación del capital pasaba, como se indica en el artículo mencionado, por la lógica de intensificación de la plusvalía relativa sustituyendo mano de obra por capital. No existían posibilidades para que se gestara una alianza de clases, como la que había dado origen al peronismo, con el retorno –aunque fuera moderado– a un capitalismo redistribucionista. El salario era enfocado como un costo y no como un componente vital de la demanda. Los parámetros de reproducción del capital en los 70 poco tenían que ver con los existentes en los 40.

21

En tercer lugar –y estrechamente ligado con el punto anterior– el contexto internacional era radicalmente diferente. En 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó los precios del barril de crudo. Los precios se cuadruplicaron, agravando una recesión económica mundial –por la suba de los costos de producción– que ya se venía anunciando. El trasfondo de la crisis era el agotamiento del Estado de bienestar keynesiano adoptado en los años 40 por los países capitalistas centrales.¹⁸ El gran capital iniciaba

17 Véase, en este mismo libro, Sebastián Rodríguez y Sergio Nicanoff: “La Revolución Argentina y la crisis de la sociedad posperonista”.

18 Ya desde fines de los años 60 se vislumbraba un proceso a nivel mundial cuya dinámica se caracterizaba por lo siguiente: a) la mayor fortaleza de los sindicatos y del movimiento obrero conducía a una caída en la tasa de ganancia del capital; b) aumentaban los déficits fiscales estatales; c) el sistema capitalista mundial sufría una crisis de legitimidad perdiendo niveles de consenso político. De ese modo se abría una etapa

una fase de reorganización de la producción y de la explotación de la fuerza de trabajo abandonando, paulatinamente, el modelo taylorista-fordista.

La expansión económica llegaba a su fin, reemplazada por lo que se denominaría como estanflación –una devastadora combinación de recesión con inflación– mientras el desempleo crecía aceleradamente.

La nueva situación internacional impactó de lleno en la línea de flotación del plan Gelbard. Los precios agropecuarios se deterioraron rápidamente y se perdieron mercados clave –la Comunidad Económica Europea anunciaría, posteriormente, el cierre de sus mercados para la carne argentina– mientras el costo de los bienes importados crecía vertiginosamente. El aumento del precio de las importaciones fue la ocasión esperada por los empresarios para plantear la rediscusión del pacto social argumentando que la suba de sus costos tornaba imposible mantener congelados los precios. Esa presión del capital se tradujo en un paulatino desabastecimiento de productos esenciales y en la consiguiente aparición de un mercado negro donde se podían comprar los artículos faltantes pagando sobrepuestos. Al aca-
paramiento se agregaron el crecimiento del contrabando, eludiendo la acción fiscal del Estado, y la falta de inversión en el sector privado; elementos todos que demostraban la decisión del capital de mantener como fuera su tasa de ganancias. De manera recíproca, la burocracia sindical, sometida a un constante desgaste ante los reclamos obreros, no podía asistir impávida al lento deterioro salarial, por lo que se lanzó decididamente a presionar para lograr una renegociación del pacto social. La puja distributiva estaba abiertamente planteada y ninguno de los esfuerzos estatales por reencauzar el conflicto para mantener la concertación lograba disimularlo. El subsidio estatal, mediante un tipo de cambio preferencial, otorgado a las empresas para las compras de insumos importados, terminó por aumentar el déficit fiscal y disminuir las reservas monetarias existentes. Del mismo modo, el aumento del 13 por ciento de los salarios en marzo de 1974, con su contrapartida de autorización para los empresarios de aumentos de

de replanteos para el capitalismo que llevó a terminar con el modelo de acumulación basado fuertemente en el Estado keynesiano y a aplicar nuevas políticas económicas para recuperar la tasa de ganancia.

precios, suba de tarifas públicas y combustible, no conformaba a ninguna de las partes en pugna, de manera que, en los hechos, el acuerdo pasó a ser letra muerta.

Intensificación de la lucha de clases, lógica de acumulación del capital, contexto internacional modificado, eran aspectos que, articulados entre sí, tornaban inviable el plan económico. Finalmente, la pretendida recuperación del poder estatal ensayado por Perón, requisito insoslayable para que el plan Gelbard se consolidara, fracasó rotundamente. Como hemos señalado, el ataque a los sectores díscolos del movimiento peronista y de la clase trabajadora no conocía pausas. El abortado ataque del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) al regimiento del Ejército de Azul, en la provincia de Buenos Aires, era utilizado para obligar a la renuncia del gobernador de ese distrito, Oscar Bidegain, aliado de Montoneros. Al poco tiempo, una asonada policial en la provincia de Córdoba, con copamiento de la Casa de Gobierno, culminaba con una intervención federal del distrito que avalaba la sedición al desplazar definitivamente a Ricardo Obregón Cano y Atilio López, gobernador y vice respectivamente, y conspicuos miembros de la izquierda del peronismo.

23

El disciplinamiento no se agotaba en lo institucional. Con una bomba conectada al encendido del auto del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien salvó milagrosamente su vida, hacía su aparición pública, en noviembre de 1973, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A. Se trataba de una organización terrorista de ultraderecha organizada directamente desde el Estado, bajo la dirección efectiva de López Rega, que reclutaba bajo su paraguas a los grupos que ya habían actuado en Ezeiza. Las bandas parapoliciales se lanzaron a la caza y asesinato —por ahora sin firma— de decenas de activistas estudiantiles, sindicales, barriales, culturales ligados a las diversas organizaciones de base. El terrorismo de Estado comenzaba a estructurarse desde las propias entrañas del gobierno peronista. Su aparición era parte de una estrategia continental contra-insurgente apadrinada directamente por Estados Unidos.¹⁹ Su esen-

19 Desde principios de la década de 1970 el Departamento de Estado norteamericano apoyó activamente la generalización de las dictaduras militares en América Latina: la asonada militar en Bolivia en 1971; la disolución de las cámaras legislativas en Uruguay, implementada por el presidente Juan María Bordaberry, que abrió las puertas

cia consistía en la generalización del terror en la población civil. El diseño de esta estrategia de aniquilamiento, aplicada por primera vez en el continente en Guatemala, tenía como blanco predilecto no a los núcleos clandestinos de las organizaciones revolucionarias —que, justamente por estar ocultos, se hallaban más protegidos—, sino a quienes asumían algún tipo de militancia pública en agrupaciones masivas de base. A través de golpes sistemáticos dados en la base social, se buscaba el retraimiento y la desmovilización de la población para aislar a las organizaciones revolucionarias. Una vez logrado esto se podía pasar a la fase de destrucción total de las mismas.²⁰ Esta nueva fase represiva la representaba en Argentina la Triple A. Su diseño operativo corría por cuenta de López Rega, pero difícilmente podría haberse desarrollado sin el aval político que Perón concedía permanentemente a su secretario privado. El viejo general, más allá de su deteriorado estado de salud, había demostrado su voluntad de proceder violentamente con quienes transgredían los límites fijados por su proyecto de poder, incluso “fuera de la ley y violentamente”.²¹ La terrible contradicción era que su proyecto de recrear condiciones de consenso para el Estado y el sistema político, terminaba siendo sostenido por una brutal represión que excedía las leyes del propio Estado al que se pretendía relegitimar. Lejos de cicatrizar, la crisis orgánica se acentuaba. Las contradicciones sociales, al expresarse —de manera deformada— dentro del peronismo en sus batallas internas por el control del gobierno, terminaron por hacer pedazos los sueños de consolidación del poder estatal hasta poner en tela de juicio el enorme capital político del propio Perón.

24

para un posterior gobierno militar; el golpe en Chile encabezado por Augusto Pinochet, con el asesinato del presidente constitucional Salvador Allende, en septiembre de 1973, son algunas de las demostraciones empíricas de la alianza contrarrevolucionaria establecida entre las clases dominantes latinoamericanas y el país del norte. La Doctrina de Seguridad Nacional pasaba a una etapa de generalización del Terrorismo de Estado.

20 Para un análisis de esta estrategia contrainsurgente, aunque más focalizado en Uruguay, véase Eleuterio Fernández Huidobro: *Historia de los Tupamaros. En la Nuca*, Montevideo, Banda Oriental, 2001.

21 Véase el discurso de Perón dirigido a los diputados de la Juventud Peronista en Oscar Anzorena: *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, p. 296.

3. Soledad y muerte

Para los Montoneros, la hipótesis del cerco había sido finalmente dejada de lado, al tornarse insostenible por las acciones del propio líder. El 1º de mayo de 1974 se dispusieron a expresar su frustración en la mítica Plaza en ocasión de los festejos por el día del trabajador. El tradicional discurso de mayo de Perón fue recibido con la consigna “¿Qué pasa, qué pasa General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”, al tiempo que la presencia de Isabel provocaba un contundente “No rompan más las bolas, Evita hay una sola”. Un desencajado Perón lanzó una violenta arenga donde calificó a las huestes juveniles de “estúpidos, imberbes e infiltrados”. Las columnas Montoneras comenzaron espontáneamente a retirarse de la concentración. La mitad de la Plaza de Mayo vacía se transformaba en una imagen contundente de la irreversible división del peronismo.

Atenazado por una dinámica de cuestionamiento al pacto social que desbordaba todas sus previsiones, el conductor puso en marcha su última jugada política. El 12 de junio la CGT convocó a una movilización para defender el gobierno tras la amenaza de Perón de renunciar a la presidencia. El jefe del peronismo ponía en juego todo su carisma para retomar las riendas de un proceso que se tornaba ingobernable. Detrás de ese gesto se encontraba la imposibilidad política y económica de aplicar un proyecto que sólo se mantenía en pie por el prestigio que aún conservaba su mentor en buena parte de la sociedad. No había tiempo para nada más. El 1 de julio tras un paro cardíaco, fallecía Juan Domingo Perón. Una desolada multitud desfiló interminablemente frente a su ataúd para despedirlo. Eran parte de ese mismo pueblo que, en su último discurso, el General había sindicado como “su único heredero”. La realidad era mucho más cruel: Isabel Perón asumía la Presidencia, acompañada de José López Rega.

TERCERA PARTE: TRANSFORMACIÓN FALLIDA Y DERRUMBE

1. Las nuevas alianzas de Isabel Perón

Los primeros pasos del gobierno de Isabel se beneficiaron con el temor de los factores de poder ante la posibilidad de un vacío político de consecuencias imprevisibles. Por eso, tanto los grupos económicos como la dirigencia sindical, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el radicalismo prestaron su apoyo, circunstancial, a la nueva presidente.

Aprovechando esa circunstancia, el nuevo núcleo de poder se propuso, en primer lugar, terminar con la tarea de destruir las corrientes obreras clasistas y la izquierda peronista. Con un ritmo vertiginoso se sucedieron la intervención de los gremios de Gráficos, de Prensa de Buenos Aires, la FOTIA, las seccionales cordobesas de Luz y Fuerza y el SMATA. Raimundo Ongaro era encarcelado mientras se dictaba orden de captura sobre Agustín Tosco y René Salamancá. La generación de líderes sindicales protagonista de las luchas obreras desde el Cordobazo era finalmente desplazada de los gremios que lideraban.

26

En el plano educativo las designaciones de Oscar Ivanissevich en el Ministerio Nacional, y de Alberto Ottalagano como interventor de la Universidad de Buenos Aires, instalaban una gestión abiertamente fascista, lanzada a depurar los claustros de cualquier atisbo de oposición. En pocos meses, más de 4000 docentes e investigadores fueron despedidos, más de 1600 estudiantes se encontraban encarcelados y centenares partían al exilio ante las amenazas de muerte de los grupos parapoliciales. Una ola de clausuras de medios de comunicación ganaba las calles.

La Triple A dio un enorme salto en su acción terrorista multiplicando los asesinatos, ahora con comunicados que asumían su autoría, y en noviembre de 1974, se instrumentaba el Estado de Sitio para todo el país.

La brutal derechización del gobierno se enmarcaba en un intento de rediseñar las alianzas del partido gobernante acercándose a las Fuerzas Armadas y a los grupos más concentrados del poder económico. A los militares se les ofrecía un mayor protagonismo en la re-

presión mientras los grupos parapoliciales realizaban clandestinamente las tareas de exterminio. Se partía del supuesto de que desaparecería cualquier posibilidad de golpe de Estado si la nueva administración asumía como propias todas las exigencias que reclamaban las cúpulas castrenses. Al gran capital se le brindaba todo el apoyo coercitivo del Estado para garantizarle la recuperación plena de su autoridad en el seno de las fábricas y un plan económico que tuviera directamente en cuenta sus necesidades.

El requisito para ese último objetivo era el desplazamiento de Gelbard del Ministerio de Economía. El otrora número dos de la gestión peronista, arquitecto de un plan que fenecía ante la puja distributiva y el salto inflacionario, adolecía de sustento político real tras la muerte de Perón y terminó renunciando en octubre de 1974. Su caída se produjo a manos de sus antiguos aliados con los que había combatido a la izquierda peronista: el lopezreguismo y la burocracia sindical. En esa recomposición de las relaciones de poder dentro del gobierno, tanto los gremialistas como el círculo de poder que rodeaba a Isabel se lanzaban a lo que denominaban la etapa de peronización del gobierno, lo que implicaba ubicar en el mando a funcionarios de insospechada ortodoxia doctrinaria. En ese incesante devenir de disputas e intrigas, donde los amigos de ayer pasaban a ser los enemigos de hoy, la defenestración de Gelbard no era más que el prolegómeno de la pelea de fondo entre esas dos facciones que habían sobrevivido con mayor fortaleza a las pugnas internas del peronismo.

Las cúpulas sindicales creían llegado el momento de recuperar la autonomía que, a regañadientes, habían cedido a Perón. Se trataba de presionar para lograr renegociar el pacto social, obteniendo, ahora sí, ventajas reivindicativas que reafirmaran su control de los sindicatos. Confiados en que el despliegue represivo había terminado por sepultar la movilización de base, se prepararon para quedarse con la dirección de los principales resortes del gobierno.

El grupo fascista que encabezaba López Rega –del que Isabel no era más que su mascarón de proa– estaba decidido a ocupar todos los espacios posibles abandonando la intención de Perón de recrear un sistema político consensuado parlamentariamente con el radicalismo. Repudiando la ingeniería de acuerdos diseñada por Perón, buscaron legitimarse mediante el uso del terror y, paralelamente, apro-

piándose de la simbología peronista para sus propios fines y presentando a Isabel como la auténtica heredera del caudillo y la única que podía garantizar la unidad del movimiento peronista, ya purgado de izquierdistas. Para ese fin, se montaron espectaculares operativos de propaganda como la repatriación de los restos de Eva Perón, traídos definitivamente de España, o la nacionalización de las bocas de expendio de las empresas petroleras Shell y Esso.

El camino asumido por el gobierno, para contar con el beneplácito del gran capital, debía ser capaz de demostrar su capacidad de disciplinar ya no sólo a las bases obreras, sino incluso a la propia burocracia sindical. La nueva etapa demandaba para el poder económico una reestructuración cuya piedra de toque era la caída del salario, por medio de un profundo ajuste, para recomponer su tasa de ganancia. Nada de eso se concedía con los devaneos redistribucionistas de la burocracia sindical. En la búsqueda de transmutar definitivamente al peronismo en garante político de los intereses de las fracciones más concentradas del capital, el lopezreguismo debía llevar adelante la batalla contra la dirigencia gremial, lo que implicaba el abandono del modelo de Perón basado nodalmente en los pactos tripartitos.

La llegada de Alfredo Gómez Morales en octubre de 1974 al timón de la economía, era el producto de una coyuntural transacción entre la burocracia sindical y el lopezreguismo, dado que la presidente y su consejero todavía no se sentían plenamente confiados en la fortaleza de su poder. El recién llegado comenzó un plan de ajuste cautelosamente administrado en grageas homeopáticas para no irritar a los sindicatos. Pretendía reformular la Ley de Inversiones Extranjeras para atraer capitales foráneos que compensaran la falta de inversiones del sector productivo local mientras devaluaba el peso para recuperar competitividad en las exportaciones. No lograría nada de esto por la lógica inexpugnable de la crisis. Los aumentos salariales concedidos eran automáticamente devorados por la inflación, ya que los empresarios los trasladaban directamente a los precios. Sin apoyos políticos de importancia, Gómez Morales renunció en junio de 1975. Se iniciaba un momento de inflexión determinante que marcaría uno de los picos más altos de la crisis de dominación.

Celestino Rodrigo –hombre de López Rega– fue el designado para reemplazar a Gómez Morales y llevar adelante el mayor plan de ajuste realizado en décadas. La reacción obrera no le iría en zaga.

2. El Rodrigazo y la insubordinación obrera

El nuevo ministro debutó aplicando una batería de drásticas medidas que convulsionaron a todo el país. El peso se devaluaba en más del 100 por ciento; las tarifas de los servicios públicos subían en un promedio cercano al 50 por ciento; el aumento de los combustibles elevaba el precio de la nafta en un 175 por ciento, consecuentemente se disparaban los precios de todos los bienes básicos de la canasta familiar, mientras los alquileres con contratos vencidos subían más de un 90 por ciento y los medicamentos, alrededor de un 100 por ciento. La lógica de “terapia de shock”reemplazaba los intentos de ajuste gradual de Gómez Morales. El poder adquisitivo de los salarios terminó siendo pulverizado de un plumazo, y se produjo una brutal transferencia de ingresos hacía el gran capital, particularmente hacia los exportadores. Su significado político fue mucho más allá de la ortodoxia de los planes de ajuste que se aplicaron anteriormente. Era diferente cualitativamente, no sólo por la magnitud de los cambios planteados, sino porque su aplicación resignificaba la muerte del peronismo tal como se lo conocía hasta ese momento.²² Dinamitaba todo intento de conciliación, de arbitrar entre las clases en pugna, de concertación y acuerdo, de interés por el desarrollo del mercado interno para asumir, descarnadamente, los intereses de las fracciones más poderosas de la burguesía. Representaba el adiós a la utopía del capitalismo autónomo para abrazar la utopía del libre mercado, el reino desregulado de los ricos. Le volvía la espalda a su mayoritaria base obrera y ponía el rumbo, sin rubor ni disimulos, hacia la City, la UIA y la Sociedad Rural. En el plan Rodrigo estaban presentes –en germen, de manera aún imperfecta– los postulados que, poco después, haría suyos Martínez de Hoz desde la dirección económica de la dictadura militar. En la búsqueda de reemplazo de las alianzas sociales históricas (sindicatos, empresarios nacionales) por otras, que

29

22 Para un análisis en este sentido, véase Alejandro Horowicz: *Los cuatro peronismos*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

tenían como epicentro los grandes grupos económicos, el peronismo isabelino prefiguraba la silueta del peronismo menemista de la década de 1990. Si ese nuevo rostro del peronismo no llegó a estructurarse plenamente en los años 70, fue porque su tiempo aún no había llegado. Para que lo hiciera debía ser capaz, antes que nada, de pulverizar la protesta obrera. En ese momento era, todavía, una tarea imposible.

La protesta social, aparentemente desgastada por la escalada represiva, demostró toda su potencia en los meses de junio-julio de 1975. En los meses anteriores al lanzamiento del plan Rodrigo, las formas de resistencia de la clase obrera se habían expresado en acciones menos visibles pero demostrativas de la profundidad del descontento. La aprobación de la Ley de Contratos de Trabajo, que dificultaba los despidos y garantizaba la estabilidad en los empleos, inauguró una espectacular suba del ausentismo en las fábricas por parte de los trabajadores. Cerrados, momentáneamente, otros caminos, se recurría a canales inorgánicos de protesta que no por ello dejaban de preocupar profundamente a los empresarios. A su vez tomaban fuerza acciones colectivas como el trabajo a reglamento o el trabajo a tristeza” que, al no asumir la forma de huelgas directas, dificultaban su represión a través de las nuevas leyes vigentes. En los establecimientos continuaba el proceso de recuperación de los organismos de representación de los trabajadores, como cuerpos de delegados y comisiones internas, que darían lugar al nacimiento de la expresión más organizada y radical del poder obrero en las fábricas: las coordinadoras fabriles.²³ Se trataba de un movimiento surgido desde las bases que, partiendo de los lugares de trabajo, comenzaba a articular entre sí, por zonas geográficas, a los obreros de distintas fábricas y ramas de producción. Lo más dinámico del activismo sindical generó una nueva forma de organización autónoma basada en las asambleas masivas y en la participación directa de los trabajadores, heredando la experiencia del clasismo. Ponían especial énfasis en superar la dispersión articulando las luchas en organismos propios, al margen de las estructuras oficia-

30

23 Para el análisis de este fenómeno tomamos en cuenta, especialmente, los trabajos de Yolanda Colom y Alicia Salomone: “Las Coordinadoras Interfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975-1976”, y de María Cotarelo y Fabián Fernández: “Lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la sociedad: Argentina, 1975-1976”, publicados en la revista *Razón y Revolución*, N° 4, otoño de 1998.

les manejadas por la burocracia sindical. Partían de la cooperación y la solidaridad obrera, pero no se limitaban a la lucha salarial sino que cuestionaban, con su acción, la dominación del capital en las fábricas y la dominación global garantizada por el Estado. Configuraban un ámbito político de los obreros, de una democracia de base mucho más profunda en sus contenidos que la democracia parlamentaria, un ámbito totalmente refractario a su institucionalización por parte del Estado.²⁴ Su momento de expansión se da en el contexto de la reacción popular al Rodrigazo.

Ante la magnitud de los aumentos de precios, los jerarcas sindicales advirtieron que su supervivencia política se encontraba puesta en juego. No querían la confrontación con el gobierno pero, entre el fuego cruzado de la inflexibilidad gubernamental y la insubordinación de base encabezada por las coordinadoras, consiguieron la libertad de negociación en paritarias para acordar nuevas escalas salariales con los empresarios. En ellas, gremios como la UOM o Textiles lograron aumentos que superaron cómodamente el 100 por ciento. El gobierno se resistió a homologar los acuerdos, consciente de que significaban la quiebra del plan de ajuste. La dirigencia gremial intentó la imposible empresa de canalizar la movilización obrera bajo su dirección, presionando al gobierno para que reconociera los aumentos salariales, al mismo tiempo que intentaban preservar a Isabel de toda crítica culpabilizando solamente al equipo económico. Ésa fue la estrategia que expresaron tanto la concentración de la UOM del 24 de junio como el paro con marcha diseñado por la CGT el 27 del mismo mes. La respuesta de Isabel consistió en anular por decreto las negociaciones paritarias y otorgar un aumento del 50 por ciento. La guerra estaba definitivamente declarada.

De manera progresiva, a lo largo de todo el país, estallaba por abajo la huelga obrera que iba paralizando toda la estructura productiva, al margen de las conducciones sindicales nacionales. Las coordinadoras, reunidas ahora en un Plenario de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, demostraban su poder organizativo y capacidad de convocatoria. Su falencia residió en su dificultad para nacionalizar definitivamente la huelga, posibilidad

24 Véase Adolfo Gilly: "La anomalía argentina", en Pablo González Casanova (comp.): *El Estado latinoamericano: teoría y práctica*, México, Siglo XXI, 1990.

que aún conservaba la dirección de la CGT. Puesta entre la espada y la pared, la dirigencia de la central obrera convocaba a un paro general de 48 horas para el 7 y 8 de julio que legalizaba la huelga de hecho impulsada desde abajo. Al reclamo de aprobación de los acuerdos salariales se sumaba el pedido de renuncia de Rodrigo y López Rega. Se producía así un acontecimiento histórico: por primera vez, la CGT declaraba una huelga general a un gobierno peronista. La magnitud de la protesta terminaría por doblarle el brazo al gobierno. Isabel aprobaba los contratos en litigio y López Rega abandonaba el país. Poco después, Rodrigo renunciaba. Las principales reivindicaciones planteadas por el movimiento obrero se habían logrado, pero distaban de ser un triunfo definitivo.

3. A modo de balance de las luchas del período

Las jornadas de mediados de 1975 significaron, para los actores del período, múltiples enseñanzas. La burocracia sindical lograba salvar, temporalmente, a Isabel de la debacle, especulando que a partir de allí el gobierno quedaría preso de sus decisiones, al tiempo que redobla- 32 esfuerzos para aniquilar el activismo combativo de las fábricas.

Para las cúpulas empresariales y militares, que habían seguido atentamente los acontecimientos, la conclusión inequívoca era que el gobierno de Isabel estaba definitivamente muerto. Sólo un golpe de Estado que fuera capaz de emprender un genocidio sistemático contra la población estaría en condiciones de acometer el disciplinamiento definitivo de la clase obrera, primer requisito básico para reorganizar el bloque de clases dominante; establecer nuevos patrones de acumulación y reinsertar el capitalismo argentino en el mercado mundial. La preparación del golpe se tornó el afán principal de la totalidad de las fracciones de la burguesía argentina, ubicando como enemigo principal la rebelión obrera. Políticos siempre atentos a las necesidades del poder real, como el líder del radicalismo Ricardo Balbín, se apresuraron a hablar de la existencia de “una guerrilla industrial” proclamando, de hecho, la necesidad de un exterminio en las fábricas que acabara con las expresiones autónomas.

Los actores sociales surgidos en el seno de las clases subalternas, como reflejo de la generalizada impugnación social nacida tras el

Cordobazo, se encontraban con la imposibilidad de generar nuevas relaciones de fuerza que torcieran el rumbo del anunciado golpe de Estado. La convergencia de trabajadores y clases medias que desveló a las clases dominantes durante largos años llegaba a su fin, fragmentada en diversas direcciones.

Por un lado, las coordinadoras fabriles representaban la expresión más alta del camino recorrido por la clase trabajadora para poner de pie un proyecto propio, alternativo, de sociedad. A su vez, simbolizaban su debilidad, sus límites. Como lo plantea Adolfo Gilly,²⁵ “el espacio fabril proletario se niega a subordinarse al espacio mercantil burgués pero, a diferencia de éste, no está en capacidad de crear un metabolizador general de su política para el conjunto de la sociedad. Pone en crisis al sistema de dominación y al Estado, pero no puede resolver esa crisis a su favor”. Circunscriptas al ámbito fabril, no lograron consolidar formas organizativas permanentes a nivel nacional y plantarse como alternativa de cambio para el conjunto de las clases subalternas. Su insuficiente grado de desarrollo –que justamente el golpe de Estado venía a abortar– les impedía presentarse como el núcleo central de un bloque histórico de todos los explotados que quebraría, irreversiblemente, el sistema de dominación. Al no poder darse ese salto cualitativo, en los tiempos que la crisis de dominación imponía, se produjo el reflujo de las luchas y su consiguiente derrota.

33

De manera convergente, se reducía el espacio para una alianza de los trabajadores con las clases medias, en la medida en que franjas crecientes de éstas comenzaban a reclamar un golpe que pusiera orden en el país. Desesperadas por la inflación, la espiral de violencia, la corrupción y el espectáculo de descomposición del gobierno de Isabel, una vez más pusieron sus expectativas en las Fuerzas Armadas, olvidando lo sucedido en la dictadura anterior. Se transformaron en la –pasiva– base de masas que necesitaban las clases dominantes para efectivizar el golpe con el mayor consenso posible.

El accionar de las principales organizaciones armadas –Montoneros y ERP– terminó colaborando, a despecho de sus intenciones, con la estrategia elaborada por sus enemigos. Más allá de las evidentes diferencias políticas entre las dos formaciones guerrilleras,

25 Adolfo Gilly, *op. cit.*

existían elementos ideológicos compartidos que las llevaron a respuestas similares ante las complejidades de la etapa. La ofensiva contrarrevolucionaria, que comenzó a desplegarse desde Ezeiza, marcó, como vimos, un cambio en la estrategia represiva que las fuerzas guerrilleras no alcanzaron a comprender en toda su magnitud. Presionados por su propia militancia de base, que todos los días veía caer compañeros asesinados por las balas de los escuadrones de la muerte, se refugiaron en su poder de fuego, multiplicando las actividades militares como forma principal de respuesta. Para buena parte de la población, la dinámica de acciones armadas pasó a ser vista como un enfrentamiento entre grupos violentos y en consecuencia, fue perdiendo paulatinamente la legitimidad conseguida durante el enfrentamiento a la dictadura. De manera creciente, el eje de la política centrado en el plano militar hizo que las organizaciones armadas no advirtieran que lo que ganaban en capacidad operativa lo perdían en inserción social. Si ese proceso de creciente aislamiento no fue evaluado a tiempo se debió tanto a la autosuficiencia, el vanguardismo y el sectarismo de esas organizaciones, como a la persistencia de una concepción de guerra popular prolongada que llevaba al predominio del militarismo. Como otro elemento de peso hay que agregar el hecho –pocas veces remarcado– de que la crisis de dominación y los niveles de conflictividad existentes llevaban a que nuevos activistas se incorporaran a la guerrilla, sin darse cuenta de que, mientras se crecía en cuadros, se alejaban amplias franjas de la población.²⁶ Lo cierto es que, con el pase a la clandestinidad de Montoneros –6 de septiembre de 1975– y la multiplicación de acciones contra los cuarteles del Ejército –acción de Formosa por Montoneros, Batallón de Arsenales de Monte Chingolo por el ERP, por mencionar las más recordadas–, se planteaba un enfrentamiento de aparato militar contra aparato militar que, desde el inicio de la estrategia contrainsurgente, fue evaluado por las Fuerzas

34

26 Esa es una de las observaciones que remarca un ex miembro de la Dirección Nacional del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)-ERP. La afirmación tiene, probablemente, más que ver –en lo que refiere al aumento de incorporaciones– con la experiencia del partido liderado por Santucho que con la situación de Montoneros durante la etapa post-Ezeiza. Véase Luis Mattini: *Hombres y mujeres del PRT-ERP*, Buenos Aires, Campana de Palo, 1995.

Armadas como el escenario más propicio para el aniquilamiento de la guerrilla. Las organizaciones armadas caerían en la trampa.²⁷

La apretada síntesis desarrollada con respecto al estado de las clases subalternas y las organizaciones revolucionarias a fines de 1975 –problema de una complejidad analítica que excede los límites de este trabajo– nos indica el grado de fragmentación y divergencia existentes en ese momento en el seno de las clases populares.

A partir de las jornadas de junio-julio, se iniciaba un reflujó de las luchas sociales sobre el que se consolidaría el proyecto gólpista.

4. Derrumbe y golpe

Las Fuerzas Armadas aprovecharon –y alentaron– la descomposición del gobierno de Isabel para recuperar la credibilidad y el consenso perdidos. Se presentaron como la única alternativa de salida al caos –mientras ayudaban a incrementarlo–, esperando el máximo desgaste posible del gobierno peronista para, recién entonces, proceder a lanzar el golpe. Frente a la guerrilla, eligieron exacerbar el carácter de su amenaza para legitimarse como los defensores de la patria que salvarían al país de la conspiración marxista mundial. Eligióron Tucumán, escudados en el intento del ERP de desarrollar un frente guerrillero rural en los montes de la provincia, como laboratorio para la aplicación en pequeña escala de lo que, tiempo después, implementarían en todo el territorio nacional. Al conseguir la decisión de Isabel de convocar al Ejército para combatir “los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán“, desplegaron con total impunidad su estrategia a través del Operativo Independencia. Allí se instalaron los primeros centros clandestinos de detención donde se aplicaron los métodos de la tortura y la desaparición de personas. Antes de atacar directamente a la guerrilla, procedieron a establecer el terror sistemático sobre la población civil para quitarle a aquélla apoyatura

35

²⁷ Vale aclarar que esta generalización no es válida para el conjunto del multifacético arco de la izquierda revolucionaria. Algunos grupos –tanto del peronismo como marxistas-leninistas– criticaron el militarismo e intentaron formas de inserción social que, sin renunciar al uso de la violencia, priorizaban el trabajo de base, sobre todo en las fábricas. Señalemos además que tanto el ERP como Montoneros mantuvieron un importante nivel de presencia en los conflictos obreros de la época. El problema es que ésa no era su estrategia principal.

social. Cuando el presidente en ejercicio Ítalo Lúder –que había asumido temporalmente, dado que Isabel solicitó un periodo de licencia por una supuesta enfermedad– les transfirió por decreto a las Fuerzas Armadas el control nacional de la represión para “aniquilar la subversión”, el golpe de Estado se acercó a pasos agigantados.

El general Jorge Rafael Videla ya se encontraba en la jefatura del Ejército tras el desplazamiento del general Alberto Numa Laplane. Todas las fichas estaban colocadas, sólo faltaba esperar el momento oportuno.

Paralelamente, el gran empresariado pasaba abiertamente a la oposición por medio de la creación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), liderada por las corporaciones representativas de la gran burguesía agraria, pero que incluía también a las cámaras empresariales industriales y comerciales. Para el frente empresario, los culpables de la crisis eran la CGT y la CGE, y criticaba al gobierno por “entregar el país al sindicalismo continuando su camino hacia el marxismo”²⁸. Por insólita que sonara la acusación, realizada a un gobierno claramente ubicado a la derecha del espectro político, es demostrativa de la voluntad empresarial de asociar cualquier reclamo sindical a un proyecto revolucionario. De manera más imaginativa, en febrero de 1976, realizaron un paro patronal de actividades por 24 horas sin pérdida de salarios para los trabajadores. Sembraban el terreno para el golpe, ansiosos por conseguir un régimen autoritario que estuviera realmente en condiciones de ejercer el control social y, a su vez, permitiera la más absoluta libertad de mercados.

Al coro golpista, se sumaron las afinadas voces de la cúpula eclesial, que, por medio del provicario castrense, monseñor Victorio Bonamín, indicaban: “¿Y no querrá (Dios) algo más de las Fuerzas Armadas... debe alzarse lo que está tan caído, y que bueno es que sean los primeros en alzarse los militares? Que se pueda decir de ellos que una falange de gente honesta, pura, hasta ha llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país”.²⁹

28 Citado en Ricardo Sidicaro: *Los tres peronismos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

29 Citado en Pablo Kandel y Mario Monteverde: *Entorno y caída*, Buenos Aires, Planeta, 1976.

El último paso hacia el golpe se dio cuando Washington, a través del secretario de Estado Henry Kissinger, les aseguró a los militares el inmediato reconocimiento diplomático del futuro gobierno y su apoyo al baño de sangre por venir. “Lo que tengan que hacer, háganlo rápido”, afirmaría, poco después, el funcionario norteamericano.

Mientras tanto, el partido gobernante continuaba con su disgregación política –el nuevo enfrentamiento interno era entre los denominados verticalistas, defensores de la permanencia de Isabel en el gobierno, y los antiverticalistas, que buscaban su desplazamiento del Poder Ejecutivo– y con su impotencia para controlar la desbocada crisis económica; tres ministros de economía se sucedieron desde la caída de Rodrigo: Pedro Bonanni, Antonio Cafiero y Emilio Mondelli.

Con este último, el gobierno intentó el recurso final para permanecer en el poder. Tras ofrecer un nuevo plan de ajuste, propuso cerrar el Parlamento, instalando una dictadura de hecho, como había sucedido en Uruguay. La propuesta ya no tenía ningún interés para las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976 los militares realizaron el último golpe de Estado de la historia argentina. Del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones surgió un proyecto que se propuso refundar estructuralmente la sociedad argentina. Lo haría en su sentido más perverso, muy lejos de los sueños revolucionarios con los que una generación recibió el retorno del peronismo al gobierno. Entre 1973 y 1976 mediaba una brecha mucho más grande que, simplemente, tres años.